

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, Y BIS IN IDEM¹

Por

MIRIAM CUGAT MAURI
Profesora Titular de Derecho Penal

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 17 (2012)

RESUMEN: Cuando se va a cumplir un año de la entrada en vigor de la RPPJ empieza cundir el desaliento, porque no se tienen noticias de que en los Juzgados y Tribunales españoles se estén instruyendo procedimientos penales contra las mismas, a la vez que no pasa un mes sin que la doctrina y quienes viven de cerca los problemas penales detecten nuevos problemas y carencias en la regulación penal que auguran un mal futuro.

El problema de la competencia jurisdiccional es solo uno de los muchos que se pueden señalar. Un vacío legal difícilmente colmable a través de las normas originariamente previstas para las personas físicas.

PALABRAS CLAVE: responsabilidad penal de las personas jurídicas; multinacionales; competencia jurisdiccional penal.

SUMARIO: I. Introducción. II. El problema: la internacionalización del delito y su perseguibilidad. III. Una nueva realidad que agrava el problema: las empresas multinacionales responsables del delito. IV. El espacio judicial europeo como modelo avanzado de cooperación penal. V. La prohibición del bis in idem como límite a la persecución y sanción del delito. VI. Vías de persecución de las multinacionales responsables de delitos.

ABSTRACT: One year after the entry into force of the criminal liability of corporations, there is no news about the fact that the Spanish Courts are directing criminal proceedings against them, while day after day the list of applicative problems and legal shortcomings identified by scholars and practitioners increases. One of these loopholes relates to the issue of criminal jurisdiction, that is difficult to be tackled through the rules originally intended for individuals.

KEYWORDS: criminal liability of corporations; multinationals; jurisdiction in criminal affairs.

¹ Artículo realizado en el marco del Proyecto de investigación "Prevención y sanción de la delincuencia económica" (DER2010-18688), dirigido por la Prof. Mercedes García Arán y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

I. INTRODUCCIÓN

Hace ya tiempo que la imagen del delincuente individual, animado por móviles o pasiones estrictamente personales y en conflicto con víctimas asimismo singulares, ha ido difuminándose con la aparición de nuevos patrones de conducta criminal.

La identificación de nuevos objetos de tutela penal, como el medio ambiente o el orden socioeconómico, no se ha traducido únicamente en la creación de nuevas tipicidades con las que se ha ido engrosando el elenco de modalidades delictivas, sino que también ha tenido efectos sobre el desarrollo de la teoría del delito y el responsable penal. Piénsese, por ejemplo, en el impacto que la aparición de los modernos delitos de peligro ha tenido sobre la modulación de categorías como el dolo (“de peligro”) o en la evolución de la teoría del sujeto responsable, que ha debido dar carta de naturaleza al papel del grupo en la conformación de las decisiones y acciones individuales.

Precisamente, una de las manifestaciones más innovadoras de las transformaciones sufridas por la teoría del sujeto responsable, aunque no la única, ha sido el reconocimiento de la capacidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas - en adelante, RPPJ -, que ha llegado a nuestro Derecho de la mano de la reforma de 2010. Mediante ella, se ha dado ciertamente respuesta a muchas cuestiones que suscitaba la lucha contra determinadas formas de criminalidad que no podía limitarse al castigo del ejecutor de las decisiones colectivas so pena de arriesgar la operatividad o justicia de la respuesta penal. Sin embargo, a la vez que se cerraban algunos problemas, se abrían otros, la mayoría de los cuales relacionados con la falta de preparación de la teoría del delito para acoger las particularidades de la nueva realidad delictiva protagonizada por las personas jurídicas.

De las muchas cuestiones que, en el ámbito de la llamada parte general del Derecho penal, quedan abiertos, a continuación, trataré de las implicaciones que el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene para una de las dimensiones del principio de legalidad: la prohibición de *bis in idem*, que se pone en jaque cuando entran en escena multinacionales o holdings que pueden desplegar sus sedes, negocios y efectos lesivos en muchos Estados a la vez, todos ellos competentes para perseguir, juzgar y sancionar la conducta delictiva.

II. EL PROBLEMA: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DELITO Y SU PERSEGUIBILIDAD

La existencia de delitos con dimensión internacional no es nueva. Los Códigos decimonónicos ya preveían delitos contra bienes jurídicos extranacionales entre los “Delitos contra el derecho de gentes”, que, por su naturaleza, atraen para sí la competencia jurisdiccional de varios Estados a la vez. Además, a propósito del análisis del *locus commissi delicti*, tradicionalmente se han identificado otros casos de internacionalización circunstancial del delito, en supuestos en que éste se comete en varios Estados a la vez, como en el ejemplo “de manual” del paquete bomba que viaja de un país a otro, cada uno de los cuales podía reclamar el derecho a juzgarlo.

La novedad radica hoy en la agudización del carácter transfronterizo de los delitos, que ha llegado de la mano de dos sucesos de distinta naturaleza. Por un lado, la internacionalización de la propia política criminal, cada vez más comprometida con la protección de bienes jurídicos supranacionales (que se ha traducido, por ejemplo, en la tipificación de hechos como genocidio o los fraudes a la UE). Por otro lado, el desarrollo de avances tecnológicos de alta potencialidad lesiva, que fácilmente pueden provocar que lo cometido en un Estado tenga repercusiones en otros, como sucede cuando el funcionamiento de las centrales nucleares situadas en el territorio de un país despliega sus efectos contaminantes en el espacio jurisdiccional de otros, o cuando mediante el uso de las TIC se afecta a usuarios de cualquier Estado.

En este contexto, debe negarse que la internacionalización del Derecho penal surja con la aparición de las multinacionales como posibles responsables penales. Era previo a las mismas y por ello los problemas que acarrea tampoco podrían terminar con la eliminación de la RPPJ, como a veces se ha sugerido. Por ello, la solución debe venir de la adaptación de las reglas tradicionales a las transformaciones del modelo de responsabilidad penal. Veamos algunos rasgos de la nueva situación y las soluciones que demanda.

III. UNA REALIDAD ORILLADA QUE AGRAVA EL PROBLEMA: LAS EMPRESAS MULTINACIONALES RESPONSABLES DEL DELITO

La irrupción en la escena penal de las empresas, en particular, las multinacionales y otras formas societarias complejas con implantación transnacional, abunda en los problemas acabados de describir.

A nadie se le escapa que, a diferencia de lo que sucede con las personas físicas que no poseen el don de la ubicuidad, las personas jurídicas no sólo pueden estar domiciliadas en varios Estados a la vez, sino también desarrollar simultáneamente su

actividad en otros tantos Estados, con lo cual los criterios de atribución de la competencia jurisdiccional pueden multiplicarse, tanto desde el punto de vista de la nacionalidad del responsable penal como del lugar de comisión del delito.

Cierto es que, como se ha adelantado, no se trata de un problema exclusivo de las personas jurídicas. Las personas físicas pueden también, ocasionalmente, tener doble nacionalidad e, incluso, los delitos cometidos por ellas pueden ser cometidos en varios Estados a la vez, cuando, por ejemplo, el vertido tóxico expande sus efectos por todos los Estados por los que fluye el agua contaminada, o, cuando el virtud del principio de ubicuidad, se considera que quien manda una bomba por correo postal comete el delito tanto en el lugar de realización de la acción como en el de producción del resultado lesivo. De modo que, también respecto de las personas físicas, pueden aparecer conflictos derivados de la acumulación de criterios para la atribución de competencia jurisdiccional penal para el enjuiciamiento de un mismo hecho, que conduzcan a soluciones dispares o divergentes.

Ahora bien, en el caso de las multinacionales, el problema se complica, no sólo porque extiendan su radio de presencia y actuación a varios países a la vez, con la consiguiente apertura del abanico de criterios de atribución competencial por razón de la nacionalidad o territorio de comisión del delito, sino también por la vinculación de su responsabilidad penal a la prueba de la comisión del hecho delictivo por una persona física, sobre la que pueden recaer criterios de atribución competencial distintos.

De nuevo, debe admitirse que, la confluencia de tantos criterios de atribución competencial como sujetos encausados no puede considerarse nueva, pues también aparece en los supuestos de participación criminal, si bien, una vez más, se agrava con las personas jurídicas, en especial, multinacionales, en las que la duplicidad o multiplicidad de centros de imputación penal y el consiguiente aumento de complejidad procesal que ello supone, se convierte en la norma.

Podría pensarse que, en sí misma considerada, la acumulación de criterios de atribución de competencias no debería constituir un problema, antes al contrario, podría considerarse un mero modo de reforzar las posibilidades de persecución penal de la conducta delictiva. Sin embargo, ello sólo podría afirmarse categóricamente si pudiera garantizarse que la competencia definitiva fuera otorgada al Estado con más posibilidades de culminar con éxito el proceso, lo que no será así si en la atribución de competencias prevalecen criterios ajenos a las necesidades del proceso, como el principio de no extradición de nacionales y la aplicación “compensatoria” del principio de personalidad activa, en los supuestos de empresas consideradas “propias”.

Para la conjura de los peligros que puede suponer dejar la suerte del proceso penal al albur de pruritos nacionalistas o las imprevisibles derivas del principio *prior tempore*

potior iure, en el ámbito de la Unión Europea, se ha intentado llegar a un acuerdo de mínimos para garantizar que los variados criterios de atribución competencial penal de los distintos Estados no obstaculicen el ideal de búsqueda del mejor foro posible para el enjuiciamiento de los hechos que guarden conexión con alguno de los Estados miembros.

Dejando de momento de lado el modelo de la Unión Europea, sobre el que volveré, veamos algunos problemas de perseguibilidad que se han planteado en el plano internacional, a propósito del potencial criminógeno de las empresas exportadoras y cómo han intentado afrontarse a través del Convenio OCDE *de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales*, de 1997 (ratificado el 3-1-2000, BOE 22-2-2002), y transpuesto por LO 3/2000 (BOE 12-1-2000).

El problema que la OCDE quería resolver era el de la falta de persecución efectiva de los actos de corrupción cometidos en el mercado internacional y, más en concreto, en determinados Estados importadores, atendidas las directas repercusiones que lo que en ellos sucediera pudiera tener sobre el respeto de las reglas inherentes al libre mercado, en especial, entre los competidores pertenecientes a los Estados exportadores reunidos en la OCDE.

Así, con el fin de suplir la falta de control de los Estados importadores sobre los actos de corrupción de su propia función pública, los Estados exportadores, reunidos en el seno de la OCDE se comprometieron a perseguir a quienes pudieran corromper a los funcionarios públicos extranjeros², con expresa inclusión, por cierto, de las personas jurídicas³; y, como para ello se requería de las correspondientes normas sustantivas y procesales, se fueron aprobando las correspondientes reformas de los ordenamientos jurídicos de los Estados exportadores.

En el caso español, la traducción más directa de la firma del mencionado Convenio fue la tipificación, en 2000, del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, actualmente contenido en el art. 445 CP⁴. No se modificó, sin embargo, la LOPJ, que ya recogía los dos criterios de atribución competencial exigidos por el

² Art. 1.1: “Cada Parte tomará las medidas necesarias para tipificar como delito según su derecho el hecho de que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, directamente o mediante intermediarios, a un agente público extranjero, para ese agente o para un tercero, con el fin de que el agente actúe o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de funciones oficiales con el fin de conseguir o de conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.”

³ Art. 2 del Convenio OCDE.

⁴ Así España aprobó la LO 3/2000, 11-1, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, por la que se introdujo el art. 445 bis, posteriormente trasladado al art. 445 por LO 15/2003 y reformado por LO 5/2010

Convenio: territorialidad y personalidad⁵, de los cuales pareciera que el segundo era el que estaba destinado a convertirse en el de ordinaria aplicación en los países exportadores que quisieran perseguir la corrupción cometida por sus empresas fuera de las fronteras nacionales.⁶

Pues bien, a pesar de todas las precauciones destinadas a evitar los vacíos de punibilidad y perseguibilidad en la materia, lo cierto es que, como mínimo en España, este delito ha tenido una aplicación inapreciable, lo que demuestra que la multiplicación de competencias jurisdiccionales no es siempre garantía de eficacia del sistema. Si el Estado con mayores posibilidades de perseguir la práctica corrupta por residenciarse en él la prueba de su comisión no colabora en su persecución penal, de poco valdrá que otro Estado tenga formalmente atribuida la competencia jurisdiccional. Más importante que la multiplicación de competencias es la buena coordinación y jerarquización de las mismas, como se ha intentado hacer en el ámbito de la Unión Europea.

IV. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO COMO MODELO AVANZADO DE COOPERACIÓN PENAL

En el camino hacia la unificación europea, actualmente en crisis, ha tenido un papel vertebrador el proceso de construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia común, regido por los principios de confianza mutua y solidaridad, mediante los que se ha amortiguado la falta de unificación penal sustantiva⁷ y procesal⁸. En este contexto, el

⁵ Artículo 4 Jurisdicción

1. Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para afirmar su jurisdicción sobre la corrupción de un agente público extranjero cuando el delito se cometa en todo o en parte en su territorio.

2. Cada Parte que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales por delitos cometidos en el extranjero tomará las medidas que sean necesarias para afirmar su jurisdicción con el fin de proceder de ese modo con respecto a la corrupción de un agente público extranjero de conformidad con los mismos principios.

3. Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un supuesto delito de los previstos en el presente Convenio, las Partes interesadas, a petición de una de ellas, celebrarán consultas con el fin de determinar la jurisdicción más apropiada para la persecución.

4. Cada Parte examinará si su base actual de jurisdicción es eficaz para luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros y, en caso negativo, tomará las medidas oportunas para subsanarlo.

⁶ Obsérvese que, a diferencia del Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (art. 7), hace referencia estricta a los propios nacionales, sin extensión del criterio a los propios funcionarios. Ahora bien, esa no es la única diferencia entre ambos Convenios, pues el europeo recoge, junto a la corrupción activa, la corrupción pasiva.

⁷ Ello no significa que paulatinamente no se hayan ido aproximando las diversas legislaciones penales sustantivas, de lo que constituye una muestra reciente la LO 5/2010 de reforma del Código penal español.

reconocimiento recíproco de resoluciones penales⁹ y la cooperación policial y judicial¹⁰ se han erigido en principios rectores de las relaciones intracomunitarias, hasta el punto de imponerse, en ocasiones, al control de doble incriminación por parte de los Estados miembros, como, por ejemplo, sucede con determinados delitos objeto de la *euroorden*.

En este ámbito de relaciones, puede presuponerse la buena disposición a la cooperación judicial de los distintos Estados. Ahora bien, ello no es garantía de la ausencia de conflicto competencial, que también puede aparecer cuando todas las partes invoquen en su favor argumentos de interés general en los que puedan sinceramente creer.

De modo que, los criterios para la resolución de conflictos de competencias serán siempre necesarios, aunque en el ámbito de la Unión europea deberían estar más en la línea de los que rigen las relaciones internas, en las que el interés del proceso pasa, o como mínimo debería pasar, por encima de las suspicacias mutuas, más propias de las relaciones internacionales. Sin embargo, lo cierto es que están todavía por desarrollar.

Los Convenios o Decisiones Marco sectoriales, como por ejemplo el Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, *relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea*, se limitan a recabar a los Estados que extiendan sus competencias a la

⁸ Del mismo modo, también la legislación procesal se ha ido aproximando hacia un modelo y garantías comunes. Al respecto, véase, por ejemplo, el Libro Verde de la Comisión - Garantías procesales para sospechosos e inculcados en procesos penales en la Unión Europea, /* COM/2003/0075 final/; y la Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea [COM (2004) 328 final].

Sobre las perspectivas de evolución en la materia, véase, por todos, TIEDEMANN, K., "El futuro del proceso penal europeo", texto de la conferencia de clausura del "Congreso internacional sobre Terrorismo y Proceso penal acusatorio", Universidad de Jaume I de Castellón, 30-10-2003.

⁹ Este principio se ha erigido en la piedra angular del sistema de cooperación judicial civil y penal en la Unión diseñado en el Consejo Europeo de Tampere (1999) y desarrollado por el *Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal* (2001/C 12/02, DO CE 15 1 2001), así como por el *Programa de La Haya, de consolidación de la libertad, la seguridad y la Justicia en la Unión europea* (2005/C 53/01, DOUE de 3 de marzo de 2005). Sobre sus presupuestos e implicaciones, véase la *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre reconocimiento mutuo de las decisiones finales en materia penal* (COM (2000) 495 final - no publicada en el Diario Oficial), que subraya que el reconocimiento mutuo es la contrapartida necesaria a la diversidad de legislaciones penales, en un contexto de exigida confianza recíproca y necesidad de cooperación judicial. Sobre su aplicación y perspectivas de ulterior desarrollo, véase la *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y el fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros* {SEC(2005) 641}- COM (2005) 195 final, de 19 de mayo de 2005.

¹⁰ Cuya expresión máxima es el sistema de cooperación de Eurojust, creado para la persecución de las formas más graves de delincuencia en el seno de la Unión europea, por la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, *por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia*.

persecución de los delitos en cuestión, lo que nos remite a una regulación perfectamente definida y clara pero estrictamente nacional¹¹, eso sí, en un contexto de cooperación mutua¹². Así mismo, la propia Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, *sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales*, que, desarrollando las previsiones del Programa de la Haya¹³, apunta a la adopción de criterios de común aplicación, tiene especial

¹¹ “Artículo 7 Competencia

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto a las infracciones que haya tipificado de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4 cuando:

- a) la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio;
- b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios;
- c) la infracción se cometa contra una de las personas mencionadas en el artículo 1 o contra un miembro de las instituciones de la Comunidad Europea mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 que sea al mismo tiempo nacional de ese Estado;
- d) el autor de la infracción sea un funcionario comunitario al servicio de una institución de la Comunidad Europea o de un organismo creado de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.

2. En el momento de la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 13, todo Estado miembro podrá declarar que no aplicará una o varias de las normas de competencia contempladas en las letras b), c) y d) del apartado 1 del presente artículo o que sólo las aplicará en casos o en condiciones particulares.”

¹² Como así se prevé expresamente: “Artículo 8 Extradición y acción penal

1. Todo Estado miembro que, en virtud de su legislación, no conceda la extradición de sus nacionales adoptará las medidas necesarias para establecer su propia competencia sobre las infracciones penales que haya tipificado de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4, cuando sean cometidas por sus propios nacionales fuera de su territorio.

2. Todo Estado miembro, cuando uno de sus nacionales sea presunto autor en otro Estado miembro de una infracción tipificada de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4, y no conceda la extradición de dicha persona al otro Estado miembro únicamente debido a su nacionalidad, deberá someter el asunto a sus autoridades competentes para que éstas efectúen, si procede, las correspondientes diligencias judiciales. Con el fin de que puedan realizarse tales diligencias, se remitirán los documentos, informaciones y objetos relativos a la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957. Se informará al Estado miembro requirente de las diligencias efectuadas y de su resultado.

3. A los efectos del presente artículo, se considerarán «nacionales» de un Estado miembro los definidos como tales de conformidad con cualquier declaración que dicho Estado miembro haya hecho con arreglo a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio europeo de extradición.

Artículo 9 Cooperación

1. Si un procedimiento relativo a una infracción tipificada de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4 afecta al menos a dos Estados miembros, éstos cooperarán de manera efectiva en la investigación, en las diligencias judiciales y en la ejecución de la sanción pronunciada, por ejemplo mediante la asistencia judicial, la extradición, la transmisión de las diligencias o la ejecución de las sentencias dictadas en otro Estado miembro.

2. Cuando más de un Estado miembro tenga competencia sobre una infracción y cualquiera de ellos pueda entablar al respecto una acción judicial viable basándose en los mismos hechos, los Estados miembros interesados cooperarán para decidir cuál de ellos actuará contra el autor o autores de la infracción con el fin de centralizar, si fuera posible, las diligencias judiciales en un único Estado miembro.”

¹³ El Programa de La Haya sobre consolidación de la libertad, la seguridad y la Justicia en la Unión Europea (2005/C 53/01), orientado al refuerzo del sistema de cooperación, también recoge la necesidad de contar con criterios para resolver conflictos de jurisdicción.

cuidado es subrayar que ese objetivo debe alcanzarse sin invasión del terreno de competencias propias de los diversos Estados.

Así se desprende del hecho de que, para la solución de los conflictos de competencias, la referida Decisión Marco deje la última palabra a los Estados¹⁴, subrayando que, en ningún caso, se obligará a ninguno de ellos a ejercer o renunciar a sus competencias¹⁵. De hecho, la misma posibilidad de someter el conflicto a Eurojust, queda condicionada al criterio de los Estados¹⁶.

De modo que, en este ámbito se reproducirán los choques de criterios tradicionales, como el de territorialidad o personalidad, con las excepciones expresamente previstas en algunos instrumentos comunitarios, como la *Euroorden*.

Piénsese, por ejemplo, en las conductas caracterizadas por el cruce ilícito de las fronteras comunitarias- como el favorecimiento de la inmigración ilegal o el contrabando - que irremediamente suscitarán un interés persecutorio común a los diversos Estados implicados; o en los supuestos en que en el ejercicio de la libertad de circulación el nacional de un Estado miembro pueda fijar su residencia en otro y cometer el delito en un tercer Estado; o por fin, los supuestos en que el delito se cometa a lo largo de todos los Estados por los que se desplace su autor, en ejercicio asimismo de su libertad de circulación, como puede suceder con los delitos permanentes o de estado - como el secuestro de menores o de pertenencia a banda armada-. En todos estos casos, pueden acumularse criterios de atribución positiva de competencias por razón del lugar de comisión del delito, de residencia, o de nacionalidad del autor, que son el presupuesto del conflicto de jurisdicciones¹⁷.

¹⁴ DM 2009/948/JAI , Considerando 9: “Al intentar alcanzar un consenso sobre cualquier solución eficaz tendente a evitar las consecuencias adversas derivadas de la tramitación de procedimientos paralelos en varios Estados miembros...” las autoridades competentes deben considerar los criterios pertinentes, entre los que se pueden incluir los que figuran en las Directrices publicadas en el Informe anual de Eurojust 2003 y que se orientaban a las necesidades de los profesionales del Derecho, y tener en cuenta, por ejemplo, el lugar en que se cometieron la mayor parte de los hechos delictivos, el lugar en que se sufrió el mayor perjuicio, el lugar en que se encuentra el sospechoso o imputado y las posibilidades de garantizar su entrega o extradición a otras jurisdicciones, la nacionalidad y el lugar de residencia del sospechoso o imputado, los intereses importantes de las víctimas y testigos, la admisibilidad de las pruebas y cualquier retraso que pueda producirse.”

¹⁵ DM 2009/948/JAI , Considerando 11: “No debe obligarse a ningún Estado miembro a renunciar a su competencia ni a ejercerla si no desea hacerlo.”

¹⁶ DM 2009/948/JAI , Considerando 14.

¹⁷ Como se expone en el LIBRO VERDE sobre los conflictos de jurisdicción y el principio *non bis in idem* en los procedimientos penales, (2005) 696 final, Bruselas, 23.12.200, “ha aumentado el número de procesamientos múltiples por un mismo asunto y el número de conflictos “positivos” de jurisdicción, dado que muchos órganos jurisdiccionales penales nacionales han ampliado considerablemente el alcance de sus competencias en los últimos años” pues, como se ha dicho, los órganos comunitarios todavía no han asumido competencias en materia penal. En el mismo sentido, véase, BLANCO CORDERO, I., “El principio *ne bis in idem* en la Unión Europea.

V. LA PROHIBICIÓN DEL BIS IN IDEM COMO LÍMITE A LA PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO

La falta de criterios jurídicamente vinculantes para la definición del Estado “con mejor derecho” para perseguir el delito será, a la postre, caldo de cultivo de posibles duplicidades procesales y penales. Por ello se hace precisa la formulación de garantías del ciudadano frente al exceso punitivo que pudiera derivarse de la acumulación de pretensiones sancionadoras de distintos Estados a la vez, como la prohibición de *bis in idem*¹⁸.

En el ámbito comunitario¹⁹, este principio se reconoce en el art. 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (en adelante, CAAS)²⁰: *Aplicación del principio*

Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5ª) de 10 de marzo de 2005 en el Asunto C-469/2003: Asunto *Miraglia*, *Diario La Ley*, nº 6285, 30-6-2005.

¹⁸ Como subraya el LIBRO VERDE sobre los conflictos de jurisdicción y el principio *non bis in idem* en los procedimientos penales, (2005) 696 final, Bruselas, 23.12.200: “este principio no evita los conflictos de jurisdicción derivados de la existencia de múltiples procesamiento en curso en dos o más Estados miembros; sólo puede aplicarse para evitar un segundo procesamiento por el mismo asunto, cuando una resolución que prohíbe el procesamiento posterior (*res judicata*) ha puesto fin al procedimiento en un Estado miembro.”

¹⁹ BLANCO CORDERO, I., “El principio *ne bis in idem* en la Unión Europea”, *cit.*; DE HOYOS SANCHO, M., “Eficacia transnacional del *non bis in idem* y denegación de la euroorden”, *Diario La Ley*, núm. 6330, 30-9-2005; DÍAZ PITA, MM., “Informe sobre el principio *non bis in idem* y la concurrencia de jurisdicciones entre los Tribunales penales españoles y los tribunales penales internacionales”, *International Review of Penal Law* (col. 73); GARCÍA ALBERO, R., “Aplicación del principio *non bis in idem* en el contexto comunitario, a propósito de la STJE de 11 de diciembre de 2008”, *Iuris*, febrero, 2009; JIMENO FERNÁNDEZ, F., “Algunas reflexiones sobre el principio *ne bis in idem* y el artículo 54 del Convenio de Aplicación de Schengen [Comentario a la STJCE *Van Esbroeck* (C-436/2004) de 9 de marzo de 2006]”, *Diario La Ley*, núm. 6496, 2 de junio, 2006; LEÓN VILLALBA, FJ., “Sobre el axioma *ne bis in idem*”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007; MORÁN MARTÍNEZ, R., GUJARDO PÉREZ, I., Conflictos de jurisdicción y principio *ne bis in idem* en el ámbito europeo, Centro de Estudios Jurídicos, 2010, Madrid; MUÑOZ LORENTE, J., *La nueva configuración del principio non bis in idem*, La Ley, Las Rozas, 2001; NIETO MARTÍN, A. “Principio de legalidad, *ne bis in idem* y proceso justo en el Derecho penal europeo”, *Iustel*, Comentario a la jurisprudencia del TJCE, mayo-septiembre, 2007; NIETO MARTÍN, A., “Introducción: El principio de *ne bis in idem* en el Derecho penal europeo e internacional”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007; PISANI, M. “*Ne bis in idem* y cooperación judicial europea”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007; SARMIENTO, D., “El principio *ne bis in idem* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad europea”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007; VERVAELE, J., “El principio *ne bis in idem* en Europa. El tribunal de justicia y los derechos fundamentales en el espacio judicial europeo”, *Revista general de Derecho europeo*, núm. 5, octubre, 2004, traducido por Isidoro Blanco Cordero.

²⁰ Como explica VERVAELE, “El principio *ne bis in idem* en Europa”, *cit.*, pág. 12, esta norma fue adoptada tras el fracaso del Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades europeas relativo a la aplicación del principio *ne bis in idem* de 1987. Tampoco ha prosperado de momento la Iniciativa helénica para la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio “*ne bis in idem*”.

"non bis in idem" Artículo 54 Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.

De esta situación de creciente conflictividad judicial da buena cuenta la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (en adelante, TJCE), que ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la interpretación del art. 54 CAAS, a propósito de situaciones como las apuntadas más arriba²¹.

La jurisprudencia emanada del TJCE ha abordado, entre otros, los problemas que se plantean con ocasión de los *delitos cuya comisión depende del cruce ilícito de las fronteras exteriores comunes*, como en el caso "Gasparini"²² (en el que se enjuicia la introducción de aceite extracomunitario a través de Portugal, desde donde se traslada a España).

Asimismo, se ha pronunciado acerca de las cuestiones competenciales que se suscitan cuando *la consumación del delito se extiende a lo largo del territorio comunitario*, como sucede con el tráfico de drogas, del que tratan los casos: "Van Esbroeck"²³ (sobre un transporte de droga desde Bélgica a Noruega), "Van Straaten"²⁴ (sobre un traslado de heroína desde Italia a Holanda), "Miraglia"²⁵ (sobre un transporte de droga desde Holanda a Italia) o "Kretzinger"²⁶ (sobre un transporte de cigarrillos de contrabando desde Grecia a Gran Bretaña, pasando por Italia y Alemania).

Por último, el TJCE se ha manifestado también acerca de los supuestos en que el disfrute de la libertad de circulación y residencia en el ámbito UE propicia la movilidad del responsable o la víctima del delito, provocando la *acumulación de criterios de atribución de competencias por razón de los distintos lugares en los que la misma persona puede fijar su domicilio, tener su patrimonio o cometer el delito*, abriendo un nuevo abanico de

Sobre el sentido del principio en el marco de la Unión europea y las dificultades con las que tropieza su satisfactorio desarrollo, véase, PLEITEADO MARISCAL, P., *El reconocimiento mutuo de resoluciones penales definitivas en la Unión europea*, Colex, Madrid, 2006, págs. 70 ss.

²¹ Para un análisis pormenorizado de la misma, véase, CUGAT MAURI, M., "El *Non bis in idem* en el espacio judicial europeo: estado de la cuestión", en GARCÍA RIVAS-RIQUERT (dirs.): *Garantías penales: en Argentina, España y sus sistemas de inserción regional*, Ediar, Buenos Aires, 2011.

²² STJCE 28-9-2006 (asunto C-467/04).

²³ STJCE 9-3-2006 (asunto C-436/04).

²⁴ STJCE 28-9-2006 (asunto C-150/05).

²⁵ STJCE 10-3-2005 (asunto C-469/03).

²⁶ STJCE 18-7-2007 (asunto C-288/05).

posibilidades persecutorias cruzadas. Así, por ejemplo, en los casos “Gözütok”²⁷ (ciudadano turco sancionado por tráfico de drogas en Holanda, donde residía, e investigado en Alemania, donde fue hallado en posesión de una cuenta con fondos cuya procedencia se imputaba a los anteriores hechos ya castigados), “Brügge” (ciudadano alemán juzgado en Alemania, que había cometido el hecho en Bélgica, país de nacionalidad y residencia de la víctima) o “Turanský”²⁸ (ciudadano eslovaco acusado de haber cometido un robo en Austria, contra el que se iniciaron investigaciones policiales en el país del que era nacional y un procedimiento penal en el país de comisión de los hechos).

Junto a los anteriores supuestos, que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del TJCE, podrían mencionarse muchos otros capaces de suscitar análogos conflictos de jurisdicción²⁹. Así, por ejemplo, entre los que afectan a intereses comunes, podrían añadirse los delitos de corrupción de funcionario público comunitario³⁰, o de fraude a las finanzas comunitarias³¹; o bien, entre los delitos que pueden tener relevancia transnacional por la diseminación del *locus delicti commissi*, podrían incluirse también los delitos de colaboración con banda armada³², ecológicos, etc.

Todo lo dicho describe una situación en la que la competencia para la persecución y sanción de las infracciones penales podría multiplicarse por cada uno de los Estados que guardaran algún tipo de conexión con el hecho cometido. Ahora bien, lo cierto es que no todos aquellos con competencia sobre un mismo asunto podrían hallarse en equivalente posición de garantizar el éxito del procedimiento. Por ello, una de las principales preocupaciones de la UE ha consistido en fomentar la elaboración de criterios para la atribución de preferencia competencial al Estado que se halle en la mejor posición de salida, en consideración a las posibilidades de conseguir la presencia del imputado en el proceso, obtención de pruebas, etc.

²⁷ STJCE 11-2-2003 (asuntos acumulados C-187/01 y C-385/01). Los casos “Gözütok y Brugge” han sido objeto de comentario por VERVAELE, J., “El principio *ne bis in idem* en Europa”, *cít.*

²⁸ STJCE 22-12-2008 (asunto C-491/07).

²⁹ Sobre el problema de la *multiterritorialidad* en la consumación de los delitos, ampliamente, vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Derecho Penal y Unión Europea: territorio y competencia: el espacio judicial europeo”, en obra colectiva *Sistemas Penales Europeos*, Cuadernos de Derecho Judicial, 2010.

³⁰ La persecución de estos delitos exige asimismo la adaptación de las respectivas legislaciones penales, tradicionalmente limitadas a la protección de la Administración pública nacional, motivo de la reforma del delito de cohecho por LO 5/2010.

³¹ Delitos que han exigido también la adaptación de la legislación penal española, como así se hizo en 1995.

³² Al respecto, véase la STS 380/2003, 22-12 y la SAN 65/2007, 31-10.

Ello, por supuesto, no excluye la necesaria disposición de mecanismos dirigidos a hacer efectiva la prohibición de *bis in idem*, a pesar de que, de la mano de la excepción de *cosa juzgada*, puede suceder que el primer Estado en conocer del caso, no sea el que esté en las mejores condiciones para resolver el problema en todas sus dimensiones³³.

VI. VÍAS DE PERSECUCIÓN DE LAS MULTINACIONALES RESPONSABLES DE DELITOS

La conclusión a la que hasta aquí hemos llegado es que el problema que pueda plantear la efectiva persecución penal de las multinacionales no deriva de la inexistencia de vías procesales adecuadas, sino, más bien, del peligro que la sobreabundancia de las mismas se traduzca en un colapso del sistema. Ello podría suceder tanto porque se contrapusieran intereses persecutorios opuestos, como porque la reclamación de competencias de unos Estados pudiera llevar a la pasividad de los que pudieran promover la investigación de los hechos con mayores garantías.

Basta recordar las noticias que recurrentemente aparecen en los medios de comunicación acerca de los abusos cometidos por multinacionales en el tercer mundo (explotación laboral infantil, contaminación medioambiental, etc.) y contrastarlo con la inapreciable información acerca de condenas por tales delitos en los países de origen de las empresas, para llegar a la conclusión de que, en muchos casos, el principio de territorialidad puede llegar a actuar como un manto de cobertura de lo que de otro modo podría perseguirse por la vía del principio de personalidad activa.

Pero junto a los referidos supuestos, en los que las diversas competencias de los Estados más que sumarse parecen neutralizarse mutuamente, hay otros, en los que, si quisieran ejercer efectivamente, podrían provocar a conflictos de difícil resolución.

En todo caso, sea cual sea el uso que materialmente se dé a las respectivas competencias, para conocerlas, será preciso hacer una breve mención a los criterios

³³ Subrayando las limitaciones del principio, véanse las reflexiones contenidas en el LIBRO VERDE sobre los conflictos de jurisdicción y el principio *non bis in idem* en los procedimientos penales, COM(2005) 696 final, Bruselas, 23.12.2005: *“Pero lo más importante es que, sin un sistema que atribuya los asuntos a la jurisdicción adecuada en el curso del procedimiento, el principio non bis in idem puede producir resultados imprevistos e incluso arbitrarios: al dar preferencia al primer órgano jurisdiccional que pueda dictar una resolución definitiva, produce un efecto similar al “principio de orden de llegada”. Actualmente, la elección de la jurisdicción se deja al azar, lo cual parece explicar por qué el principio non bis idem sigue siendo objeto de diversas excepciones.”*

recogidos en el art. 23 LOPJ que, siendo aplicables a las personas jurídicas³⁴, pueden presentar particularidades con relación a ellas.

Por un lado, puede suscitar dudas la identificación del *locus commissi delicti*, del que depende la aplicación del criterio de territorialidad.

En primer lugar, porque todavía no se ha aclarado en la doctrina si puede afirmarse que la persona jurídica simplemente responde del delito cometido por la persona física o bien comete el delito. Una primera lectura del art. 31 bis. 1 podría llevarnos a concluir lo primero, toda vez que en el se dice que “*las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales....*” (pár. 1º), así como “*de los delitos cometidos ... por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas*” (pár. 2º). Ahora bien, en la doctrina se ha defendido también la tesis de que la persona jurídica no sólo responde del delito, sino que también lo comete, vicarial o directamente. De modo que, cada una de las anteriores hipótesis llevará a enfocar la resolución del problema en distintas direcciones.

Si, a efectos de la aplicación del criterio de territorialidad, partimos de que sólo debe tenerse en cuenta el lugar de actuación de la persona física, los problemas sin ser inexistentes, serán los mismos que de ordinario puedan aparecer respecto de cualquier otro caso, que, en casos límite, podrían resolverse acudiendo a la teoría de la ubicuidad. Ahora bien, si admitimos que, además de la persona física, también comete el delito la persona jurídica, en ese caso, la cuestión se complica, pues deberemos contar con criterios para decidir dónde haya actuado.

Por supuesto que, si entendemos que la persona jurídica actúa vicarialmente o por medio de la *lunga mano* de sus administradores o empleados, llegaremos a la misma conclusión que en el supuesto anterior, pues coincidirá el lugar de comisión del delito de la persona física y jurídica. El problema sólo aparece si consideramos que la persona jurídica comete su propio delito, con sus propias circunstancias de lugar y tiempo, que podrían llegar a diferir de las que rodean al hecho cometido por la persona física. En ese caso, sería preciso determinar dónde debería considerarse cometido el hecho por la persona jurídica, lo que abriría la posibilidad de considerar otros lugares, como el de elección de los órganos de representación o aquel en el que se ubicaran los órganos de control de sus subordinados.

Por otro lado, tampoco está exenta de dificultades la aplicación del criterio de personalidad activa, que requiere de la previa determinación de la nacionalidad de la persona jurídica.

³⁴ Circular 1/2011 *relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010.*

De acuerdo con el criterio del art. 28 CC , el criterio para la determinación de la nacionalidad de la persona jurídica es el del lugar de su domiciliación³⁵ y, en su defecto, según el art. 41 del mismo CC , el del lugar en el que se halle establecida su representación legal o donde se ejerzan las principales funciones³⁶. En el mismo sentido se pronuncia el art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 2-7 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de capital (en adelante, LSC), que hace depender la nacionalidad de la sociedad del lugar del domicilio³⁷, y éste de aquél en el que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación (art. 9.1 LSC). Para completar sus previsiones, la LSC especifica que, en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el artículo anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos (art. 10 LSC).

Esta última previsión nos abre la duda acerca de si, a efectos penales, la nacionalidad de la persona jurídica puede quedar al albur de los posibles cambios en el centro material de las operaciones societarias y por lo tanto del lugar del domicilio del que depende la nacionalidad. En el caso de las personas físicas, es evidente que la nacionalidad tiene contornos mucho más estables y formales, que hacen que sea posible que alguien viva y actúe siempre en el extranjero conservando su nacionalidad de origen.

Ahora bien, en el caso de las personas jurídicas, deberá verse si la pluralidad de domicilios simultáneos puede generar dificultades en la determinación de la competencia penal. La solución no parece que pueda venir del Derecho penal. Es la legislación extrapenal la que marca los criterios para la atribución de la nacionalidad de las personas jurídicas y, por lo tanto, la que debe ser tomada en cuenta a los efectos de la atribución de la competencia jurisdiccional. Por ello, no puede descartarse la posibilidad de conflictos en la determinación de la nacionalidad cuando exista discordancia entre el lugar en el que se concentren las operaciones empresariales y el lugar del domicilio formal.

³⁵ “Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.”

³⁶ “Artículo 41 Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.”

³⁷ “Artículo 8. Nacionalidad.

Serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido.”

A este problema se añade el hecho de que, las multinacionales podrán tener tantas nacionalidades como domicilios, lo que de nuevo podrá ser fuente de conflictos de competencias. Para su resolución, en el ámbito UE, cabría recurrir a Eurojust. Ahora bien, ello dependerá de dos condiciones. En primer lugar, como se ha adelantado, que alguno de los Estados en conflicto quiera someterlo a su parecer. En segundo lugar, que pueda afirmarse la competencia objetiva de Eurojust, pues no se olvide que se creó para la persecución de formas especialmente graves de criminalidad organizada. Ello nos remite a un nuevo problema: la delimitación de la delincuencia de empresa de la criminalizada organizada.

La frontera entre uno y otro fenómeno no es siempre fácil de establecer, aunque conceptualmente podamos partir de algunas afirmaciones. La primera, que el hecho de que un delito se cometa desde una organización no lo convierte en delincuencia organizada. La segunda, que para afirmar la existencia de delincuencia organizada, deberán darse los requisitos legales de las diversas figuras delictivas que la recogen: los tipos cualificados en virtud de la organización (por ejemplo, en materia de tráfico de drogas o prostitución infantil), la asociación ilícita o la organización o grupo criminal.

Sin entrar aquí en los requisitos específicos de cada una de las formas de criminalidad organizada presentes en nuestro Código, puede afirmarse que se caracterizan por la convergencia de varias voluntades en la consecución de un objetivo común que, además, en el caso de la asociación ilícita, llega hasta el punto de teñir de ilicitud la estructura que las acoge.

Sin embargo, si pensamos en el modelo de responsabilidad de empresa previsto en el art. 31 bis CP, ni se exige la acumulación de responsabilidades jurídicas, ni tan solo está claro que deba existir una material acumulación de voluntades. Además, debe descartarse también la existencia de una asociación ilícita por el solo hecho de que, en el seno de la empresa, pueda cometerse algún delito, que por sí mismo no teñiría de ilicitud el conjunto. Precisamente por ello, a diferencia de lo que prevé el art. 520 CP para la asociación ilícita, la RPPJ no comporta siempre la aplicación de la pena de disolución, prevista tan solo como una de las posibilidades en el art. 33.7 CP.

De todo ello se deduce que el art. 31 bis CP no recoge una forma de criminalidad organizada, sino de responsabilidad penal, que puede cometerse en el ámbito de la criminalidad organizada o no.

En todos estos supuestos, los problemas de localización del lugar de omisión del delito podrían multiplicarse sin fin, en tanto que no siempre coincidirá el lugar de domicilio de la persona jurídica, que además puede ser plural, con el de realización de sus actividades, la nacionalidad de sus empleados o el domicilio de las otras personas a

las que pueda unirse para el desarrollo de actividades delictivas y de las que pueda depender la apreciación de una asociación ilícita.

Los criterios están por definir y quizás requieran de alguna mención expresa del art. 23 LOPJ , que, de momento, no se ha considerado precisado de reforma por la *Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal* que da forma al estatuto procesal de las personas jurídicas .

BIBLIOGRAFÍA

BERDUGO GÓMEZ DELA TORRE, Ignacio (coord.), *Lecciones y Materiales para el estudio del Derecho Penal*, Tomo 1, Iustel, Madrid, 2010.

BLANCO CORDERO, I., “El principio *ne bis in idem* en la Unión Europea. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5ª) de 10 de marzo de 2005 en el Asunto C-469/2003: Asunto *Miraglia*”, *Diario La Ley*, nº 6285, 30-6-2005.

CUGAT MAURI, M., “El *Non bis in ídem* en el espacio judicial europeo: estado de la cuestión”, en GARCÍA RIVAS-RIQUERT (dirs.): *Garantías penales: en Argentina, España y sus sistemas de inserción regional*, Ediar, Buenos Aires, 2011.

DE HOYOS SANCHO, M., “Eficacia transnacional del *non bis in idem* y denegación de la euroorden”, *Diario La Ley*, núm. 6330, 30-9-2005.

DÍAZ PITA, MM., “Informe sobre el principio *non bis in idem* y la concurrencia de jurisdicciones entre los Tribunales penales españoles y los tribunales penales internacionales”, *International Review of Penal Law* (col. 73).

GALLEGO-SOLER J., “Criterios de imputación de la autoría en las organizaciones empresariales”, en AA.VV., GIMENO JUBERO, M. A. (Dir.), *Derecho penal económico*, Estudios de Derecho Judicial, Nº72, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.

GARCÍA ALBERO, R., “Aplicación del principio *non bis in idem* en el contexto comunitario, a propósito de la STJE de 11 de diciembre de 2008”, *Iuris*, febrero, 2009.

GARCÍA ARÁN, M., “Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro homenaje al profesor Doctor Don Angel Torío López*, 1999.

GÓMEZ RIVERO, C. (coord.), *Nociones fundamentales del Derecho penal. Parte general*, Tecnos, Madrid, 2010.

GRACIA MARTÍN, L. en “La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas” en AA.VV., MIR PUIG, S. y LUZÓN PEÑA, D. (Coords.), *Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto*, Bosch, Barcelona, 1996.

JIMENO FERNÁNDEZ, F., “Algunas reflexiones sobre el principio *ne bis in idem* y el artículo 54 del Convenio de Aplicación de Schengen [Comentario a la STJCE Van

Esbroeck (C-436/2004) de 9 de marzo de 2006]”, *Diario La Ley*, núm. 6496, 2 de junio, 2006.

LEÓN VILLALBA, F.J., “Sobre el axioma *ne bis in idem*”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007.

MARTINEZ BUJÁN, C., *Derecho Penal Económico y de la Empresa, Parte General*, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

MORALES PRATS, F., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis, 129, 130.2 CP), en AA.VV., QUINTERO OLIVARES (Dir.), *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Aranzadi, Navarra, 2010.

MORÁN MARTÍNEZ, R., GUAJARDO PÉREZ, I., *Conflictos de jurisdicción y principio ne bis in idem en el ámbito europeo*, Centro de Estudios Jurídicos, 2010, Madrid.

MUÑOZ LORENTE, J., *La nueva configuración del principio non bis in idem*, La Ley, Las Rozas, 2001.

NIETO MARTÍN, A. “Principio de legalidad, ne bis in idem y proceso justo en el Derecho penal europeo”, *iustel*, Comentario a la jurisprudencia del TJCE, mayo-septiembre, 2007.

NIETO MARTÍN, A., “Introducción: El principio de ne bis in idem en el Derecho penal europeo e internacional”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007.

NIETO MARTÍN, A., *La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: un modelo legislativo*, Iustel, Madrid, 2008.

QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la transferencia de responsabilidad por las personas físicas”, en AA.VV., GARCÍA GARCÍA, M.A. (Dir.), *Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Derecho comparado y Derecho comunitario*, Consejo General del Poder Judicial, Estudios de Derecho Judicial, Nº115, Madrid, 2007.

QUINTERO OLIVARES, G., “Derecho Penal y Unión Europea: territorio y competencia: el espacio judicial europeo”, en obra colectiva *Sistemas Penales Europeos*, Cuadernos de Derecho Judicial, 2010.

RAMÓN RIBAS, E., *La Persona Jurídica en el Derecho Penal, Responsabilidad Civil y Criminal de la Empresa*, Comares, Granada, 2009.

SIMONS VALLEJO, R., (Dirs.), *La Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas: Una Perspectiva Comparada*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

PISANI, M. “Ne bis in idem y cooperación judicial europea”, en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007.

PLEITEADO MARISCAL, P., *El reconocimiento mutuo de resoluciones penales definitivas en la Unión europea*, Colex, Madrid, 2006.

SARMIENTO, D., "El principio *ne bis in idem* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad europea", en ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional*, Cuenca, 2007.

TIEDEMANN, K., "El futuro del proceso penal europeo", texto de la conferencia de clausura del "Congreso internacional sobre Terrorismo y Proceso penal acusatorio", Universidad de Jaume I de Castellón, 30-10-2003

TIEDEMANN, K., "Responsabilidad penal de personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas en Derecho comparado" en AA.VV., GÓMEZ COLOMER J. Y GONZÁLEZ CUSSAC, J. (Coords.), *Reforma de la Justicia Penal. Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann*, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1997.

VERVAELE, J., "El principio *ne bis in idem* en Europa. El tribunal de justicia y los derechos fundamentales en el espacio judicial europeo", *Revista general de Derecho europeo*, núm. 5, octubre, 2004, traducido por Isidoro Blanco Cordero.

ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. *La Responsabilidad Penal de Empresas, Fundaciones y Asociaciones*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, «El sistema de sanciones penales aplicables a las personas jurídicas», en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (coord.), *Lecciones y Materiales para el estudio del Derecho Penal*, Tomo 1, Iustel, Madrid, 2010